

¿Qué puede ganar Colombia con la eventual firma de un acuerdo de paz?

Analistas sostienen que los colombianos deben tener claro que la violencia no acabará con un posible acuerdo entre Gobierno y guerrillas. Pero sí se abrirá la puerta a las grandes reformas estancadas.

Oriana Garcés Morales - Junio 14, 2014

Desbloquear la agenda política del país e iniciar reformas sociales que han quedado en puntos suspensivos, serían los principales avances de Colombia en materia política si se llega a un acuerdo de paz con las guerrillas. Vea aquí toda la información sobre el proceso de paz.

Así lo concluyeron varios analistas consultados por El País, que explican que el conflicto armado ha sido un obstáculo en las últimas décadas a la hora de implementar reformas y programas en materia de educación, salud, vivienda, medio ambiente y desarrollo rural.

“El principal logro de un acuerdo de paz es que se desbloquea la agenda pública. En los últimos 30 años hemos tenido de tema principal el conflicto. Al superarlo, temas que no han tenido relevancia política van a empezar a tenerla”, explica el analista político Héctor Riveros.

En esto coincide Diego Arias, experto en conflicto armado, quien afirma que en el país hay desafíos “que son históricos, están pendientes y son urgentes”, pero que han sido opacados por la confrontación con las guerrillas que, si bien no es un asunto que predomine como preocupación de los ciudadanos en las encuestas, sí ha acaparado las campañas en cada elección popular.

Ese fin del conflicto entre insurgencia y Estado, añaden los analistas, también ayudaría a “desbloquear la dinámica política”, la cual no se centra solamente en las diferentes formas de gobierno, sino también en la creación de nuevos movimientos sociales sin el fantasma de una infiltración subversiva.

“En Colombia, por el conflicto, la política ha sido cerrada. No se desarrollan movimientos sociales o políticos por temor a la infiltración o señalamiento de apoyo guerrillero. Eso aleja a la población, que no protesta por miedo a la violencia”, dice Riveros, y agrega que un escenario de postconflicto daría pie a la aparición de nuevas fuerzas políticas en el país.

También, dice el investigador Ariel Ávila, se acelerarían procesos como la entrega y legalización de tierras en zonas donde se podría impulsar la productividad del campo y que se han visto marcadas por el flagelo de los actores armados, con los respectivos desplazamientos, masacres, desapariciones y ataques que ocasionan.

De hecho, para Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, lo discutido hasta el momento en La Habana con las Farc permite vislumbrar “una reforma en el ámbito rural, la ampliación de las formas de participación política, la inclusión de regiones marginales a la vida social y acciones de esclarecimiento histórico”.

Sin embargo, agrega Villarraga, el único obstáculo para impulsar reformas en el país no es el conflicto armado, sino que sus causas son mucho más profundas. “El principal es la voluntad política. Son las mismas políticas que han predominado en detrimento del sector campesino”.

El analista indica que no se ha presentado un gobierno progresista en el país que impulse este tipo de procesos, por lo que “es en el marco de los diálogos de paz donde se vuelven a poner estos temas sobre la mesa. Las negociaciones ayudan a volver a coger un camino de reforma democrática, que debió iniciar antes”.

“Firma de paz no es el fin de la violencia”

En Colombia, la violencia está frecuentemente asociada con el terrorismo generado en el marco del conflicto armado. El fin de las guerrillas, ya sea por la vía militar o negociada, es denominado como “la paz” y supone un escenario en el que retornará la tranquilidad que un gran porcentaje del país no ha experimentado.

Sin embargo, las experiencias en otros países demuestran que no todos los escenarios de postconflicto suponen una disminución de la violencia.

Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Cato en Washington, explica que “no se puede partir de que la firma de un acuerdo en La Habana significa el fin de los grupos armados, pues las circunstancias que alimentan hoy a la insurgencia continuarán en pie, como lo es el narcotráfico”.

Hidalgo afirma que un ejemplo es lo ocurrido en países como El Salvador y Guatemala, donde se llegó a un acuerdo para poner fin al conflicto entre grupos insurgentes y el Estado, pero “eso no implicó que sean catalogados como países pacíficos”.

Agrega que podría darse una situación similar a la ocurrida con la desmovilización de los paramilitares en Colombia, que dio pie a la incorporación de unos reductos de estas organizaciones a bandas criminales en función del tráfico de narcóticos.

El analista, además, indica que cerca de un tercio de la violencia en Colombia está asociada al problema de las drogas, por lo que “de muy poco sirve alcanzar un acuerdo con las Farc si las políticas prohibicionistas en cuanto a las drogas se mantienen en el hemisferio”.

Sin embargo, Ariel Ávila resalta que en ese caso la principal ganancia de un proceso de paz es terminar con “la tradición de justificarse políticamente a través de las armas, que ha sido nuestra historia republicana”. Reconoce que al firmarse la paz continuará la violencia de delincuentes, criminales y narcotraficantes, pero que ya no será un tema político, sino de seguridad.

Para Arias, la terminación de la guerra contra las guerrillas permitirá concentrar los esfuerzos del Estado en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. “Por eso se necesita continuar con unas Fuerzas Armadas fortalecidas”.

Explica que en zonas como el sur y el oriente del país, al igual que la Costa Pacífica, “son territorios en disputa o que la guerrilla comparte con bandas criminales”, por lo que al dejar de ser un actor en la zona, lo más probable es que en los primeros meses la violencia se incremente por la guerra entre los narcotraficantes para apoderarse de las rutas y cultivos de esos territorios.

“Siempre que hay un acuerdo de desmovilización con un grupo, hay un reacomodo dentro de la lógica ilegal”, afirma Arias.

Esta situación ya la han advertido organismos como la ONU, cuyo residente humanitario para Colombia, Fabrizio Hochschild, resaltó que la Fuerza Pública debe estar “preparada para controlar este problema”.

No obstante, Ariel Ávila considera que gran parte de los desmovilizados de las Farc no vivirían en las ciudades, sino que “se van a quedar en las zonas donde operaban” y que sí se notará una disminución en asuntos como los ataques a la infraestructura, los campos minados y los bombardeos cercanos a las poblaciones.

“Las Farc están presentes en 14 zonas del país y, de esas, 10 tienen presencia de economías ilegales. Entre estas últimas, seis son lugares delicados en situación de orden público, como el Pacífico nariñense y caucano”, indica.

Lo importante, concluyen los analistas, es que todos los esfuerzos del Gobierno podrían enfocarse en esa criminalidad que azota las ciudades y el campo y que ya no estaría escondida tras una bandera ideológica.